¿QUIÉN CONTROLA AL ÓRGANO CONTRALOR DE LA
MAGISTRATURA? CUANDO LA IMPOSICIÓN DE UNA MEDIDA
CAUTELAR ADMINISTRATIVA DE SUSPENSIÓN PREVENTIVA
VULNERA DERECHOS FUNDAMENTALES

WHO CONTROLS THE COMPTROLLING BODY OF THE
MAGISTRATURE? WHEN THE IMPOSITION OF AN ADMINISTRATIVE
CAUTION OF PREVENTIVE SUSPENSION VULNERA FUNDAMENTAL
RIGHTS

Jorge Isaac Torres Manrique¹

RESUMEN: La función basilar del Órgano de Control de la Magistratura Peruano, es precisamente ejercer un control correspondiente. Ello comporta que en el ejercicio del mismo, de manera alguna puede haber exceso, arbitrariedad, discrecionalidad; más bien todo lo contrario. En ese sentido, es de advertir que el referido control no se estaría llevando a cabo de manera correcta, ajustada a derecho, en el marco de un Estado Constitucional de Derecho. Así, tenemos que no pocas resoluciones del mismo vienen siendo objeto de justificadas como preocupantes críticas y reclamos. El tema se complica peligrosamente, cuando se evidencia que el referido órgano no cuenta con un ente que pueda controlar o supervisor su actuación. Entonces, al no tener un órgano que pueda controlar al contralor, las decisiones pueden fácilmente tornarse de manera discrecional, subjetivas, parcializadas, ilegales. Cuando ello ocurre, se tiene que no

¹ Consultor jurídico. Abogado por la UCSM (Arequipa). Doctorados en Derecho y Administración, por la UNFV (Lima). Presidente de la Escuela Interdisciplinar de Derechos Fundamentales Praeeminentia Iustitia (Perú). Miembro de la International Association of Constitutional Law- IACL (Serbia). Miembro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional (Colombia). Miembro del Comité Científico Internacional del Instituto Jurídico Internacional de Torino (Italia). Miembro extranjero adjunto de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (Argentina). Miembro del Instituto Vasco de Derecho Procesal (País Vasco). Par Académico Evaluador de las firmas editoras: Corporación de Estudios y Publicaciones (Ecuador) y Ediciones Jurídicas de Santiago (Chile). Autor y coautor de libros y tratados en Derecho Constitucional y Administrativo. CoDirector los Códigos Penales comentados de Ecuador, Colombia y Chile. CoDirector de los Tratados: Lavado Activos, Técnicas de Litigación Oral Estratégica y Derecho Probatorio. Ponente nacional e internacional. E-mail: kimblellmen@outlook.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5202-3886>.

solamente las resoluciones resultan ilegítimas, sino, que igual suerte termina corriendo con el colegiado que firma las resoluciones. En el presente trabajo se analiza una resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial peruano, donde resuelve acerca de la imposición de una sanción, esto es, una medida cautelar administrativa de suspensión preventiva, en contra de un magistrado y personal jurisdiccional. El enfoque que se le dá, al desarrollo del mismo es de carácter constitucional y de derechos fundamentales. Ello, en el entendido que para su elaboración se habría tenido en cuenta únicamente la ley. Lo señalado preocupa de sobremanera, en razón a que actualmente rige el Estado Constitucional de Derecho, en consecuencia, la totalidad del sistema jurídico tiene que abrazar el espíritu contenido en la Constitución. Así, la fundamentación de las resoluciones ya sean judiciales o administrativas, tienen que obligatoriamente registrar los postulados en sede Constitucional. Consecuentemente, lo hacemos desde dicho enfoque, debido que es desde el mismo que nos permitirá determinar el nivel de solidez de las decisiones. A mayor abundamiento, es de señalar que las dos grandes deficiencias de los países de la región son la institucionalidad y la infraestructura. Por ende, no ejercer un control a la magistratura, desinstitucionaliza sistemáticamente al poder judicial, por decir lo menos. En base a lo reseñado, iniciamos haciendo un breve desarrollo acerca de la naturaleza jurídica y diversas aristas de la medida cautelar. Seguidamente, elaboramos un breve resumen de la resolución materia de comentario de la presente entrega. A continuación, llevamos a cabo el análisis correspondiente. Finalmente, arribamos a las respectivas conclusiones y sugerencias.

Palabras clave: Medida cautelar administrativa de suspensión preventiva. Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Órgano de Control de la Magistratura. Derecho Constitucional. Derechos Fundamentales. Derecho Constitucional Administrativo Sancionador.

ABSTRACT: The basilar function of the Peruvian Judicial Control Body is precisely to exercise corresponding control. This implies that in the exercise of it, there can be no excess, arbitrariness, discretion in any way; Rather the complete opposite. In this sense, it should be noted that the aforementioned control would not be carried out correctly, in accordance with the law, within the framework of a constitutional state of law. Thus, we have that not a few resolutions of the same have been object of justified as worrying criticisms and claims. The issue is dangerously complicated when it is evident that the aforementioned body does not have an entity that can control or supervise its performance. So, without having a body that can control the comptroller, decisions can easily become discretionary, subjective, biased, and illegal. When this happens, it is not only that the resolutions are illegitimate, but that the same fate ends up running with the referee who signs the resolutions. AND In the present work, a resolution of the Executive Council of the Peruvian Judicial Power is analyzed, where it resolves about the imposition of a sanction, that is, an administrative precautionary measure of

preventive suspension, against a magistrate and jurisdictional personnel. The approach given to its development is of a constitutional nature and of fundamental rights. This, on the understanding that for its preparation only the law would have been taken into account. The aforementioned is of great concern, since the Constitutional State of Law currently governs, therefore, the entire legal system must embrace the spirit contained in the Constitution. Thus, the foundation of the resolutions, whether judicial or administrative, must compulsorily register the postulates in the Constitutional headquarters. Consequently, we do it from said approach, since it is from the same one that will allow us to determine the level of soundness of the decisions. Furthermore, it should be noted that the two major deficiencies in the countries of the region are institutionality and infrastructure. Therefore, not exercising control over the judiciary systematically de-institutionalizes the judiciary, to say the least. Based on the above, we begin by making a brief development about the legal nature and various aspects of the precautionary measure. Next, we prepare a brief summary of the resolution subject to comment on this issue. Next, we carry out the corresponding analysis. Finally, we arrive at the respective conclusions and suggestions.

Keywords: Administrative precautionary measure of preventive suspension. Executive Council of the Judicial Power. Body of Control of the Magistrature. Constitutional right. Fundamental rights. Sanctioning Administrative Constitutional Law.

Resumen: 1. Introducción. 2. Acerca de la medida cautelar. 3. Síntesis de la casación *in examine*. 4. Análisis de la resolución *in comento*. 5. Conclusiones. 6. Sugerencias. 7. Referencias.

1. INTRODUCCIÓN

Una de las grandes preocupaciones, recae en que muchas veces la excesiva duración del proceso, termine perjudicando al administrado o justiciable que le asiste el derecho. En ese sentido, somos contestes en que:

El proceso insume tiempo y tal consumo es inevitable so riesgo de desnaturalizar ese medio de operatoria jurisdiccional. El lapso que va desde la iniciación a la sentencia y a su firmeza, provoca desde ya en la parte que en definitiva aparecerá asistida por el derecho, un daño irreparable al postergar su reconocimiento y efectividad. Por lo demás, las cosas y bienes objeto del pleito o el patrimonio mismo de los sujetos enfrentados podrán surtir deterioros, pérdidas o disminución de valores, de modo que hacer que el fallo

favorable que uno de ellos pueda obtener se convierta, de todos modos, en una verdadera frustración y se pierda así el objetivo básico de la actividad judicial, que es tutelar de una manera efectiva los derechos que se ven involucrados en un conflicto. El orden jurídico tiene que encontrar entonces, maneras de impedir que el proceso se convierta en un instrumento que juegue inexorablemente a favor de quien no tiene la razón (RIVAS, 2005, p. 23).

En la presente entrega, analizamos y comentamos el Acuerdo N° 442-2018, emitido en fecha 25/06/18, por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial peruano, en la Medida Cautelar N° 370-1-2017-LORETO.

2. ACERCA DE LA MEDIDA CAUTELAR

En principio, es tener presente que la medida cautelar representa justamente un mecanismo procesal que permitirá, en lo posible (pues no toda medida precautoria es absoluta), asegurar la ejecutabilidad de la resolución final, lo que de por sí significa un anticipo de la futura obtención del resultado material aludido, contribuyendo aquella de ese modo a lograr los fines del proceso (MINGUEZ, 2005, p. 7).

Las medidas cautelares no tienen un fin en sí, sino que sirven a un proceso principal, y, en consecuencia, su existencia es provisoria, pues depende de las contingencias de este. Las medidas conservatorias de una prueba, por ejemplo, carecen de importancia y quedan por ello sin efecto una vez pronunciada la sentencia; pero las que tienen por fin el aseguramiento de la cosa litigiosa, subsisten hasta el cumplimiento de la sentencia condenatoria (LOZANO, 1997, p. 64).

Es de resaltar que:

Esta función garantista ha sufrido en los últimos tiempos una alteración importante, haciéndose extensiva en la medida en que se ha superado la posición de la doctrina procesalista acerca de la clásica teoría de las medidas cautelares, por cuanto estas han dejado de tener una función meramente de aseguramiento para extenderse en muchas ocasiones, a cumplir una función anticipatoria del fallo, lo que conlleva una superación del término 'cautela' para caer quizás en otro más adecuado, como podría ser el de 'prevención'.

Esta idea de prevenir que conlleven las medidas cautelares en la actualidad no es sino producto de un cambio de posición ante las mismas. No se trata tan solo de garantizar la ejecución de la sentencia, sino de garantizar la satisfacción de la pretensión, lo que supone extender la función cautelar más allá, es decir, a esa idea de prevención [...] (VILLAR, 1993, p. 14-15).

En consecuencia, el concepto de proceso cautelar será: aquel quien está destinado a garantizar procesos de conocimiento o de ejecución con los cuales tiene estrechos vínculos, pero conservando su autonomía (URTEAGA, 1996, p. 286).

A continuación, es de menester recurrir a la fuente genérica o derecho adjetivo madre o derecho procesal civil. En tanto que el mismo, orienta a los procesos homólogos a la imposición de dicha medida, esto es, a abrazar el basilar espíritu de la misma.

Luego tenemos, que el Art. 608., *in fine*, del Código procesal Civil peruano, que respecto del juez competente, oportunidad y finalidad, preconiza: “[...] La medida cautelar tiene por finalidad garantizar el cumplimiento de la decisión definitiva”.

Además, el Art. 618, *ab initio*, de dicha norma legal, en relación a la medida anticipada, establece: “Además de las medidas cautelares reguladas, el Juez puede adoptar medidas anticipadas destinadas a evitar un perjuicio irreparable o asegurar provisionalmente la ejecución de la sentencia definitiva”.

Así, resulta de capital importancia dejar constancia acerca de la obligada observancia de la naturaleza *strictu sensu* de una medida cautelar.

En ese sentido, somos contestes con:

[...] se buscará plasmar una actividad cautelar consecuente con el objetivo que hoy motiva a toda actividad cautelar que se precie de serlo: el respeto de una cabal tutela de los derechos ciudadanos, el cual pasa porque la pretensión planteada a una autoridad (en este caso administrativa) puede ser debidamente alcanzada al momento en que dicha autoridad se pronuncie al respecto (al principio al final del procedimiento administrativo); y, asimismo, porque la actividad probatoria (aquella que permitirá otorgar convicción a la autoridad para finalmente poder pronunciarse) pueda darse a cabalidad (BARRERA, 2010, p. 178).

Por su parte, ingresando al Procedimiento Administrativo Sancionador, es de verse el Inc. 1., del Art. 155., del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; que en relación a las medidas cautelares juridiza:

Iniciado el procedimiento, la autoridad competente mediante decisión motivada y con elementos de juicio suficientes puede adoptar, provisoriamente bajo su responsabilidad, las medidas cautelares establecidas en esta Ley u otras disposiciones jurídicas aplicables, mediante decisión fundamentada, si hubiera posibilidad de que sin su adopción se arriesga la eficacia de la resolución a emitir.

A su turno, el Num. 9., del Art. 12., del Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, en relación a las funciones de la Jefatura de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, establece: “Imponer las medidas de suspensión preventiva en el cargo, en casos de flagrancia, cuando se trate de jueces, auxiliares jurisdiccionales que realicen labor jurisdiccional y los que laboren en los diversos órganos de control, como producto de los procedimientos disciplinarios que conozcan”.

Y así también, es de verse el Inc. 2., del Art. 44., del Reglamento del Procedimiento Disciplinario de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, respecto del trámite de la suspensión preventiva, contempla:

El Jefe de la ODECMA y los Jefes de las Unidades de Línea de la Oficina de la OCMA, son competentes para imponer la medida cautelar de suspensión preventiva en el cargo de jueces desde los niveles Superiores a Jueces de Paz Letrado, así como los auxiliares jurisdiccionales, en caso de flagrancia. El Jefe de la ODECMA será competente para imponer la medida de suspensión preventiva a los Jueces de Paz. La apelación que se interponga contra la medida de suspensión preventiva deberá ser remitida en el día a la Jefatura de la OCMA, para el pronunciamiento en segunda y última instancia, formándose el cuaderno cautelar respectivo.

3. SÍNTESIS DE LA CASACIÓN *IN EXAMINE*

De manera resumida, tenemos que referir respecto del Acuerdo N° 442-2018, en fecha 25/06/18, emitido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial peruano, en la Medida Cautelar N° 370-1-2017-LORETO; en los siguientes términos:

Se interpuso un recurso de apelación por los señores Víctor Hernán Hinojosa Pacheco y Billy Joel Reyna Hipushima, en su condición de Juez Titular del Segundo Juzgado de Paz Letrado de Punchana, y Asistente en Atención al Público, del Área de Mesa de Única –CDG, de la Corte Superior de Justicia de Loreto, respectivamente; contra la resolución número uno, de fecha 19/05/17, expedida por la Jefatura Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA), de la Corte Superior de Justicia de Loreto, en los extremos que les impuso medida cautelar de suspensión preventiva por el término de seis meses, hasta que se resuelva definitivamente su situación disciplinaria.

Dicho recurso fue interpuesto por Billy Joel Reyna Hipushima, en su condición de Juez Titular del Segundo Juzgado de Paz Letrado de Punchana, solicitando la revocación de dicha medida cautelar, alegando la existencia de una errónea tipificación de la conducta que se le atribuye, vulnerando el principio de legalidad y razonabilidad. Agrega, que con su accionar no ha vulnerado los deberes de su cargo, ya que el acto fue de servicio bajo la creencia de una acción regular, frente al pedido de un compañero de trabajo.

Por su parte, Víctor Hernán Hinojosa Pacheco, solicitó la declaración de nulidad de la misma, alegando que el Jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA), de la Corte Superior de Justicia de Loreto, se basó en inferencias y presunciones, que el mismo ha asumido un rol de segunda instancia al señalar que no era competente y que desde el inicio de las investigaciones, se le ha privado del ejercicio de su derecho de defensa.

Los mencionados recursos de apelación fueron concedidos mediante resolución número cuatro, de fecha 29/05/17, sin efecto suspensivo, disponiéndose elevar los

actuados a la Jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial (OCMA).

En fecha 26/07/17, la mencionada Jefatura remite el cuaderno cautelar al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ).

En fecha 09/08/17, el señor Javier Oswaldo Barrón García, representante de la Sociedad Civil ante la OCMA, entre otros, advierte que el Jefe de la ODECMA, de la Corte Superior de Justicia de Loreto, dictó medida cautelar de suspensión preventiva en un procedimiento disciplinario en el que no existe flagrancia, dado que a la fecha de expedición de la misma se estaría vulnerando el Art. 12., del Reglamento de Organización y Funciones de la OCMA, en vista que la misma solo y únicamente le faculta imponer dichas medidas en caso de flagrancia, cuando se trate de jueces, auxiliares jurisdiccionales que realicen labor jurisdiccional, y los que laboren en diversos órganos de control, como producto de los procedimientos disciplinarios que conozcan.

En fecha 23/11/17, el señor Billy Joel Reyna Hipushima solicitó la caducidad de la medida cautelar impuesta. Y, el señor Víctor Hernán Hinojosa Pacheco, vía escritos de fechas: 20/11/17 y 06/12/17, solicita se declare la caducidad de la medida cautelar.

El CEPJ señala que no se analizó la condición necesaria de flagrancia que determina a su competencia, pues, no hubo inmediatez temporal entre los hechos y la prueba analizada, que permita que se califique el acto como flagrante.

Adiciona, que se ha verificado la incompetencia del Jefe de la ODECMA, de la Corte Superior de Justicia de Loreto, para dictar la medida de suspensión preventiva en el cargo. Así, dispuso declarar la nulidad de la resolución impugnada, en tanto adolece del requisito de validez de competencia, retrotrayéndose el referido procedimiento a la fecha del mencionado acto procesal y los devolvieron.

4. ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN *IN COMENTO*

En principio, cabe resaltar que el apelante, Billy Joel Reyna Hipushima, alega la existencia de una errónea tipificación de la conducta que se le atribuye, vulnerando el principio de legalidad y razonabilidad.

Por su parte el segundo, Víctor Hernán Hinojosa Pacheco, refiere que para la imposición de la referida medida cautelar, se basó en inferencias y presunciones, que el mismo ha asumido un rol de segunda instancia al señalar que no era competente y que desde el inicio de las investigaciones, se le ha privado del ejercicio de su derecho de defensa.

Y a su turno, el representante de la Sociedad Civil ante la OCMA, entre otros, advirtió que el Jefe de la ODECMA, de la Corte Superior de Justicia de Loreto, dictó medida cautelar de suspensión preventiva en un procedimiento disciplinario en el que no existe flagrancia,

Posteriormente, en el Punto Décimo Tercero, *in fine*, de la resolución *sub examine* el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, señala:

[...] del Oficio [...] emitido por el Responsable del Área de Informática de la Corte Superior de Justicia de Loreto, que se constituye en la prueba analizada que permitió presumir la existencia de una previa coordinación entre los procesados, da cuenta que el presunto hecho infractor habría sucedido el veintisiete de abril de dos mil diecisiete, lo que permite, también, inferir que no existe inmediatez temporal entre los hechos y la prueba analizada, que permite que se califique el acto irregular como flagrante.

Ergo, se advierte que la defensa contundente corrió por parte del representante de la Sociedad Civil ante la OCMA. Y que dicho sea de paso, el CEPJ tuvo a bien acoger.

No obstante, precisamos dejar constancia, que resulta sumamente preocupante como penoso, apreciar el yerro monumental de la ODECMA, de la Corte Superior de Justicia de Loreto, al haber dictado la medida cautelar de suspensión preventiva en procedimiento disciplinario respectivo.

Ello en tanto que, en principio se evidencia que no se tiene en claro, cual es la naturaleza de dicho organismo, puesto que con dicha imposición su accionar ha quedado

abiertamente en entredicho, en vista que ha demostrado que no se encuentra en la capacidad de determinar algo tan basilar, como un estado de flagrancia.

Ante lo cual, cabe obligadamente cuestionar solo como primer punto: i) ¿cómo supone dicha ODECMA, ejercer legítimamente sus funciones un órgano que se equivoca de dicha manera?, ii) ¿habrá entendido realmente la importancia y trascendencia del fiel cumplimiento de sus funciones contraloras?, iii) ¿la Jefatura de la OCMA, no pudo detectar semejante error de la Oficina Desconcentrada?, iv) ¿la totalidad del personal que labora ahí, ostenta el perfil académico profesional requerido para tal fin?, v) ¿es con ese tipo de decisiones que pretende ejercer su encomendado control a la magistratura?, vi) ¿considera que de dicha manera contribuye a mejorar la alicaída imagen de la administración de justicia?, vii) ¿se capacitan adecuada como sostenidamente para ello?, viii) ¿no se supone que un órgano de dicha naturaleza e importancia, precisa contar con una capacidad, profesional, laboral y académica, especializada y acorde a la misma?, ix) ¿y en el caso que sí lo hayan hecho, quienes y de qué manera capacitan y especializan a los contralores?, x) ¿son los capacitadores y especialistas indicados para ello?, xi) ¿las correspondientes resultan suficientes para tal fin o es que comporta además la obligada aplicación de lo aprendido?, xii) ¿cuál es la importancia que le asignan a los derechos fundamentales y al derecho constitucional?, xiii) ¿considera que resulta aceptable (por decir lo menos), corregir, sancionar un error o supuesto error, con una equivocación, incluso más grande?, xiv) ¿qué garantía ofrece para dicho error no se vuelva a repetir?, xv) ¿tomaron o tomarán las acciones correctivas que el caso amerita?.

Por otro lado, somos de la opinión que aún en el caso que los apelantes hubieren sido encontrados en flagrancia, ello no hubiese sido suficiente para imponer la referida medida cautelar.

Sostenemos lo señalado, en que para ello, se tuvo que basilarmente aterrizar en la estricta observancia de la naturaleza de la medida cautela. Esto es, determinar y

fundamentar en principio, si es que realmente ameritaba la imposición de la misma. En suma, nos referimos que debió analizarse la legitimidad en lugar de la mera legalidad.

Mención aparte, merece dejar constancia la increíble ausencia en la resolución bajo comentario, acerca de las sanciones por parte del CEPJ, como mínimo a la ODECMA, de la Corte Superior de Justicia de Loreto, por tan sideral error. Puesto, que únicamente se limita a declarar la nulidad de la resolución apelada y disponer se retrotraiga dicho procedimiento a la fecha del mencionado acto procesal.

Esto es, si quisiéramos entender la lógica que maneja del CEPJ, la misma sería: “al referido órgano contralor le resulta permitido sancionar a la magistratura, pero de manera alguna cabe sancionar al mismo”. ¿No se supone que al mencionado Consejo le corresponde actuar de manera imparcial y justa?.

La referida acotación de ausencia en la parte resolutive del CEPJ, cobra mayor trascendencia, en razón a que la misma resulta insalvable, dado que en el Punto Décimo Tercero, lo dice textualmente: “se ha verificado la incompetencia del Jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, de la Corte Superior de Justicia de Loreto, por dictar la medida cautelar de suspensión preventiva en el cargo”.

¿Habría considerado el CEPJ, que con el hecho de haberlo señalado en la parte considerativa y haber hecho mutis de lo mencionado, era suficiente?, ¿la administración de justicia y la ciudadanía se merecen la expedición de este tipo de resoluciones expedidas por el CEPJ?

Si la existencia de dichos errores y ausencias se advierten en el proceso y resolución de un caso sencillo, ¿Qué podemos esperar para los casos complejos?

Resulta sumamente preocupante, que si con lo evidenciado, sostenido y desarrollado no bastase, es de verse que con la indebida imposición de la mencionada medida cautelar de suspensión preventiva, se han vulnerado los derechos fundamentales de los apelantes, tales como: legalidad (al inobservar la norma pertinente), legitimidad (al imponer indebidamente la medida cautelar), razonabilidad (al disponer seis meses la imposición de la misma), derecho al trabajo (privar de su trabajo a los apelantes),

debido proceso (se incluye la sumatoria de los demás derechos), a la imagen personal (al estigmatizar a los apelantes con una medida cautelar que no se merecían).

5. CONCLUSIONES

En base a lo desarrollado, queda demostrado que: i) la ODECMA, de la Corte Superior de Justicia de Loreto, ii) la OCMA y iii) el CEPJ; presentan serias limitaciones por decir lo menos, en el ejercicio de sus funciones.

Cuando se habla de crisis de la administración de justicia, incorrectamente se olvida incluir a los entes mencionados. Ellos también son parte y les atañe mayor responsabilidad. No obstante, no la están asumiendo.

Se ha vulnerado los derechos fundamentales de los apelantes, verbi gratia: legalidad, legitimidad, razonabilidad, derecho al trabajo, debido proceso, a la imagen personal, seguridad jurídica, entre otros.

Ello cobra preocupante relevancia, en tanto que el poder judicial se constituye en un poder del Estado de gravitante importancia, ora como agente pacificador, ora como propulsor y garante de la seguridad jurídica. Por lo cual, las entidades referidas estarían actuando como el gato del dispensero.

6. SUGERENCIAS

Amerita observar la estricta observancia de la mística y quintaesencia de los entes referidos en el anterior acápite.

Capacitación y especialización de manera periódica a los mismos (incluida lo concerniente a, derecho constitucional y derechos fundamentales), por parte de por lo menos, la Academia de la Magistratura (AMAG).

La aplicación y supervisión de los conocimientos aprendidos como producto de las capacitaciones, requieren ser aplicados en el trabajo. De otro modo, las mismas carecen de sentido.

7. REFERENCIAS

VILAR, Silvia Barona. Las medidas cautelares: Introducción. En: VV.AA. **Las medidas cautelares**. Consejo General del Poder Judicial. Madrid, 1993.

BARRERA, Eloy Espinosa-Saldaña. Medidas cautelares en el procedimiento administrativo peruano: una mirada crítica a lo realizado y un adelanto sobre aquello que debiera hacerse al respecto. **Revista Circulo de Derecho Administrativo**. Lima, n. 9, 2010. Disponible em: <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/view/13712/14336>.

MINGUEZ, Alberto Hinojosa. **El embargo y otras medidas cautelares**. Editorial San Marcos. Lima, 2005.

LOZANO, Carlos A. Hernández. **Proceso cautelar**. Ediciones Jurídicas. Lima, 1997.

RIVAS, Adolfo A. **Las medidas cautelares en el derecho peruano**. Jurista Editores. Lima, 2005.

URTEAGA, Pedro Sagastegui. **Procesos de ejecución**. Acciones en materia de títulos valores y procesos cautelares. Editorial San Marcos. Lima, 1996.

Data da submissão: 10/04/2020

Data da aprovação: 12/06/2020